



DECLARACION POLITICA

“JUSTICIA Y RESISTENCIA, GARANTIAS DE LA NO REPETICION”

QUINTO ENCUENTRO SOBRE RACISMO Y GENOCIDIO EN GUATEMALA

Por cinco años consecutivos CALDH y AJR han impulsado este espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar en torno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos. Estos encuentros han acompañado los procesos jurídicos por genocidio impulsados en el sistema de justicia nacional e internacional por la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, y han constituido un aporte a los esfuerzos que realizan diversas organizaciones.

Hoy, insistimos en la necesidad de la justicia, reconociendo la resistencia de los pueblos ante el constante irrespeto a los derechos humanos y la amenaza de un nuevo genocidio, debido a que confluyen, entre otras cosas, la persistencia del racismo, la incapacidad del Estado en la protección de los derechos colectivos, el irrespeto a las consultas populares acerca de la explotación de los recursos naturales. Por ello este año, el encuentro se ha encaminado a debatir sobre la necesidad de la justicia y resistencia, como garantías de la no repetición.

En la ciudad de Guatemala, nos reunimos durante un día y medio 189 mujeres y 191 hombres, pertenecientes a 101 organizaciones sociales, víctimas sobrevivientes del conflicto y personas en lo individual en el V encuentro sobre racismo y genocidio en Guatemala: “Justicia y Resistencia: garantías de la No repetición”. Este espacio ha sido significativo en la lucha contra la impunidad, la denuncia y la sensibilización.

Luego de un debate enriquecedor a través de ponencias y mesas de trabajo, las y los participantes:

Constatamos y denunciemos:

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el Estado de Guatemala y la URNG establecen, entre otros, cambio de la doctrina contrainsurgente y de seguridad nacional, a fin de garantizar la integridad del territorio y soberanía de la Nación. El incremento de las fuerzas militares cuando se había avanzado en su reducción, la dislocación de gran número de ellas en las calles urbanas y comunidades rurales cumpliendo funciones de seguridad interna y el preponderante papel de las estructuras de inteligencia militar, son inequívoca muestra del incumplimiento de dichos acuerdos y de la falta de voluntad política de las instituciones estatales para avanzar en la construcción del Estado democrático de derecho.

La desclasificación de los archivos históricos de todas las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado, es fundamental para el establecimiento de la verdad y la justicia. Los jueces son los únicos que pueden determinar qué documentos son secretos de Estado. El no cumplimiento de los mandatos judiciales y de las órdenes que emanan del Comandante General del Ejército, el Presidente de la República, es desobediencia y obstrucción de la justicia, con lo cual se hace prevalecer la impunidad.

En los hechos de genocidio ocurridos en Guatemala en el pasado inmediato de la guerra intervinieron no solo elementos puros de racismo, sino también políticas del Estado llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos militares contrainsurgentes y gobiernos civiles, encaminadas a lograr la usurpación de territorios, el despojo de tierras y el saqueo de recursos naturales de los pueblos.

Estas políticas de Estado pretendían y siguen pretendiendo para todo el norte del país, un nuevo territorio, un nuevo espacio agrario, con una nueva producción y un nuevo comercio: el del petróleo, los minerales, la madera y la producción de energía eléctrica para el enriquecimiento de sectores militares a partir de 1970 y ahora compartido más claramente con la oligarquía y las empresas nacionales y transnacionales.

La prueba más clara de lo anterior es que para el año 1976 el Ejército ya había perfilado y planificado el desarrollo de la mayoría de los proyectos tanto hídricos como mineros, madereros, petroleros y de infraestructura que se están empezando a ejecutar hoy en día.

En el marco del Estado racista, discriminador y excluyente, los pueblos indígenas son nuevamente despojados de sus tierras y territorios, así como excluidos de toda posibilidad de desarrollo humano con dignidad. Ello evidencia el desconocimiento y violación de los derechos colectivos de los pueblos, tales como el territorio, con todos los recursos y bienes que se encuentran en él, la autodeterminación y la soberanía, reconocidos en la normativa internacional de derechos humanos.

El sistema patriarcal, racista y clasista, oprime, margina y subordina a las mujeres. Obstaculiza el proceso de construcción de la paz y la democracia y las relaciones basadas en el respeto. Esta situación se agrava para las mujeres indígenas, quienes sufren una triple opresión por su condición de mujeres, pobres e indígenas.

Contrario a su mandato constitucional, el Estado de Guatemala, reproduce y fomenta las características del sistema, especialmente en el sistema de administración de justicia quien no investiga, persigue y castiga a los hechores de delitos cometidos contra las mujeres, particularmente los que atentan contra su vida. Estos terribles hechos son consecuencia de la impunidad heredada desde el conflicto armado.

Las y los jóvenes son sujetos de derecho. El Estado debe garantizar el desarrollo integral de la juventud; la no aplicación de las políticas existentes para lograrlo, genera la invisibilidad y discriminación de la misma y la estigmatización social y estatal sobre su ser y quehacer. Las demandas y sus luchas han sido criminalizadas a lo largo de la historia. Hoy, como ayer, prevalece la acción represiva de las fuerzas de seguridad y la estigmatización, agravándose con la instrumentalización que el crimen organizado hace de una parte de ese segmento mayoritario de la población, lo que es combatido con el incremento de la represión, en una franca amenaza a la integridad y vida de las y los jóvenes.

Los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes organizados en los diversos sectores sociales han resistido históricamente la imposición, la represión y hasta el genocidio. Tal resistencia se expresa en el rescate de la memoria histórica, la lucha contra la discriminación, el racismo y por el acceso a la justicia.

La lucha y búsqueda de la Justicia respecto al pasado, pero también del presente y de cara al futuro, debe ir acompañada de la Verdad para que, junto con la lucha permanente por ella, sea realmente garantía de no repetición de las masacres, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala.

Frente a esta situación demandamos:

A la sociedad y organizaciones:

Unirnos y organizarnos para luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Es fundamental en esto recordar y reconstruir nuestra propia memoria histórica y difundirla en nuestras familias y comunidades. Es necesario recuperar la solidaridad.

Fortalecer los mecanismos de información y comunicación en las comunidades, en sus organizaciones, entre sí, de manera que se genere un conocimiento colectivo generador de consensos o consentimiento que permitan la toma de decisiones comunes y colectivas.

Fortalecer el protagonismo de las comunidades, las autoridades y sus formas y prácticas comunitarias tradicionales de intercambio de conocimientos y creación de consensos para la toma de decisiones colectivas y del desarrollo de acciones comunes y conjuntas comunitarias e intercomunitarias.

En el tema de Genocidio ya hay acciones que están encaminadas en procesos que se siguen dentro y fuera del país, en torno a los cuales puede y debe incrementarse la unidad, la lucha y el acompañamiento de los mismos por parte de las comunidades, de los movimientos sociales, especialmente de las organizaciones de Derechos Humanos. Esta lucha por la justicia ya afecta a toda la población guatemalteca, por cuanto en su historia reciente las agresiones, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, los crímenes de guerra y lesa humanidad, han afectado de una u otra manera a todos los sectores y pueblos de Guatemala, es a nuestro entender un buen punto de unión en la lucha actual.

Al Estado de Guatemala exigimos:

Que el ejército de Guatemala cumpla con lo establecido en los acuerdos de paz, en especial en el acuerdo de Fortalecimiento de la sociedad civil y función del ejército en una sociedad democrática. Adopte una doctrina basada en un enfoque de seguridad en democracia.

La depuración de las fuerzas de seguridad civiles y el enjuiciamiento y castigo de aquellos elementos con responsabilidad en hechos delictivos y se haga prevalecer a aquellas en las funciones de seguridad interna.

Se cumpla con lo establecido en las normas jurídicas, se acate las resoluciones judiciales y la orden presidencial entorno a la desclasificación de todos aquellos archivos históricos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Que el Estado de Guatemala incluya y garantice dentro de la currícula educativa, medios de difusión colectiva y espacios públicos a todos los niveles, contenidos que apunten a la erradicación total del racismo y cualquier forma de discriminación contra mujeres y jóvenes

Que el Estado, en especial el sistema de administración de justicia, haga valer las normas nacionales e internacionales que tipifican como delitos el racismo, la discriminación y la violencia contra las mujeres y la juventud.

Que el sistema de justicia cumpla con su mandato constitucional de investigar, juzgar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de las muertes violentas de mujeres y jóvenes.

Que el Estado de Guatemala respete el derecho a la organización, expresión, manifestación y participación de la población, especialmente el derecho a defender los derechos.

... y seguimos resistiendo

Guatemala, 20 de noviembre de 2008